

007/2025**I**

El proyecto de Orden regula los requisitos y el procedimiento de acreditación de los centros, servicios y entidades privadas, concertadas o no, que operen en el ámbito de la autonomía personal y la atención a la dependencia en Ceuta y Melilla, con el propósito de garantizar la calidad de los servicios prestados y los derechos de las personas usuarias. La norma se adapta a los criterios de acreditación aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, dando cumplimiento a su Acuerdo sobre Criterios Comunes de Acreditación, aprobado el 28 de junio de 2022, y publicado por Resolución de 28 de julio de 2022 de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales (BOE de 11 de agosto de 2022).

En particular, se establecen medidas para regular el procedimiento de acreditación de los centros, servicios y entidades privadas, y garantizar el cumplimiento de requisitos de calidad y cualificación de su personal, a fin de asegurar la prestación adecuada de los servicios.

El texto que se informa consta de una parte expositiva, ocho artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria, cuatro disposiciones finales y doce anexos.

Tras definirse en el artículo 1 el objeto de la norma, referido a la regulación de los requisitos y estándares de calidad que deberán reunir los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a personas en situación de dependencia, así como el procedimiento para obtener la correspondiente acreditación, el artículo 2 delimita su ámbito de aplicación territorial, que circunscribe a las Ciudades de Ceuta y Melilla. En el artículo 3 se establecen las definiciones y principios rectores de la norma, que coinciden con los determinados en el Acuerdo sobre Criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El artículo 4 se refiere a los requisitos de calidad exigibles a los centros y servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a personas en situación de dependencia, que, a su vez, se desarrollan en los Anexos I al VI, y en los artículos 5, 6, 7 y 8, se regulan —respectivamente— el procedimiento, la vigencia, la renovación y la revocación de la acreditación de los centros.

Habida cuenta del objeto de la Orden que se informa, tanto en su articulado como en los anexos incorporados a la misma, se prevé la recogida y tratamiento de un amplio conjunto de datos de carácter personal, cuyo análisis de necesidad se impone en atención a las exigencias derivadas de la normativa de protección de datos.

II

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos —RGPD—), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales —LOPDGDD— conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los que deben ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier persona pública o privada que lleve a cabo tratamiento de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

Entre otras definiciones, el artículo 4 del RGPD se refiere a «datos personales» como toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Y «tratamiento» como cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.

El art. 4.15 del RGPD define datos de salud como datos personales relativos a la salud física o mental de una persona física, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria, que revelen información sobre su estado de salud.

El art. 9.1 del RGPD prohíbe el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una

persona física, y *datos relativos a la salud* o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física.

Únicamente dicha prohibición no será aplicable cuando se dé alguna de las circunstancias del apartado 2, y entre ellas cuando se den las causas de los apartados b), y g) a j) del mismo (*que el tratamiento es necesario para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del responsable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral y de la seguridad y protección social; que el tratamiento sea necesario por razones de un interés público esencial; que sea necesario por razones de la salud del trabajador o asistencia sanitaria o social; por razones de interés público en el ámbito de la salud pública; o por razones de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos*). Todo ello, en los términos y con las condiciones que se establecen en dicho artículo 9 del RGPD.

Específicamente, la **letra h)** del artículo 9.2 RGPD, señala que lo dispuesto en el apartado 1 de dicho artículo no será aplicable cuando:

“h) el tratamiento es necesario para fines de medicina preventiva o laboral, evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, **prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social**, sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario y sin perjuicio de las condiciones y garantías contempladas en el apartado 3; (la negrita es nuestra)
(...)”

A su vez, la base de legitimación para el tratamiento de datos previsto en la Orden se encuentra en el artículo **6.1, apartados c) y e) del RGPD**, que establecen que el tratamiento es lícito cuando (i) es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento, o bien cuando (ii) es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. En este contexto, la prohibición inicial para el tratamiento de datos sobre “prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social”, considerados de especial protección, se levanta en el artículo 9.2.h) del RGPD, al ser necesario dicho tratamiento para la gestión de servicios asistenciales y de dependencia, garantizándose las medidas necesarias de seguridad y confidencialidad. Una vez levantada la interdicción, la base legal legitimadora de dicho tratamiento se contiene en el artículo 6.1, letras c) y e), del RGPD.

El proyecto sometido a informe desarrolla el contenido de los artículos 14.1 y 2, 16 y 34.2 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia,

plasmando, *en lo relativo a las ciudades de Ceuta y Melilla*, los criterios comunes para la acreditación de los centros, servicios y entidades privadas establecidos por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, según su acuerdo mencionado *ut supra*.

Los citados preceptos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, disponen:

“Artículo 14. Prestaciones de atención a la dependencia.

1. Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios y de prestaciones económicas e irán destinadas, por una parte, a la promoción de la autonomía personal y, por otra, a atender las necesidades de las personas con dificultades para la realización de las actividades básicas de la vida diaria.
2. Los servicios del Catálogo del artículo 15 tendrán carácter prioritario y se prestarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados.
(...)”

“Artículo 16. Red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

1. Las prestaciones y servicios establecidos en esta Ley se integran en la Red de Servicios Sociales de las respectivas Comunidades Autónomas en el ámbito de las competencias que las mismas tienen asumidas. La red de centros estará formada por los centros públicos de las Comunidades Autónomas, de las Entidades Locales, los centros de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y cuidado de situaciones de dependencia, así como los privados concertados debidamente acreditados.
2. Las Comunidades Autónomas establecerán el régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros privados concertados. En su incorporación a la red se tendrá en cuenta de manera especial los correspondientes al tercer sector.
3. Los centros y servicios privados no concertados que presten servicios para personas en situación de dependencia deberán contar con la debida acreditación de la Comunidad Autónoma correspondiente.
4. Los poderes públicos promoverán la colaboración solidaria de los ciudadanos con las personas en situación de dependencia, a través de la participación de las organizaciones de voluntarios y de las entidades del tercer sector.”

“Artículo 34. Calidad en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

1. El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia fomentará la calidad de la atención a la dependencia con el fin de asegurar la eficacia de las prestaciones y servicios.
2. Sin perjuicio de las competencias de cada una de las Comunidades Autónomas y

de la Administración General del Estado, se establecerán, en el ámbito del Consejo Territorial, la fijación de criterios comunes de acreditación de centros y planes de calidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, dentro del marco general de calidad de la Administración General del Estado.
(...)”

Las transcritas previsiones normativas, establecidas en una norma con rango de ley formal, responden a las exigencias derivadas del artículo 8 de la LOPDGDD, cuando dispone que:

“Artículo 8. Tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos.

1. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una norma de Derecho de la Unión Europea o una norma con **rango de ley**, que podrá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. Dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679. (la negrita es nuestra)

2. El tratamiento de datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por una norma con **rango de ley**.” (la negrita es nuestra)

III

Esta Agencia ha emitido diversos informes sobre la materia relativa a la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, entre los cuales cabe reseñar los siguientes:

1. Informe 271/2007, sobre el *proyecto de Orden por la que se establece un sistema de Información para la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y se crea el correspondiente fichero de datos de carácter personal.*
2. Informe 446/2012, sobre el *proyecto de Real Decreto sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.*
3. Informe 133/2013, referente al *proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.*

4. Informe 151/2013, relativo al *proyecto de Real Decreto por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre*.
5. Informe 336/2013, sobre el *proyecto de Orden por la que se regula el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia*, en cuyo contenido se establecían los rasgos esenciales del Sistema de Información para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
6. Informe 380/2013, específicamente en el ámbito de Ceuta y Melilla, sobre el *proyecto de Real Decreto por el que se regula la aplicación y desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en las ciudades de Ceuta y Melilla*.
7. Informe 36/2023, en el que, más recientemente, se analizó el *proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre*.

Estos informes se han referido a la interpretación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, proporcionando criterios técnicos y jurídicos sobre protección de datos de carácter personal en relación con las materias analizadas en cada uno de ellos.

Como se ha expuesto, el texto normativo que ahora se analiza tiene por objeto principal la regulación administrativa de la acreditación, mantenimiento, registro y/o revocación de la acreditación de determinados centros, servicios y entidades privadas, en tanto que participantes del sistema público de prestaciones diseñado por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, así como el dictado de determinadas normas procedimentales en orden a la pretendida finalidad. En consecuencia, el conjunto de sus previsiones constituye un desarrollo normativo concreto referido básicamente a aspectos de *organización y procedimiento* sobre la materia de que se trata, dentro del concreto ámbito de aplicación territorial de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

La entrada en vigor de esta nueva Orden deroga expresamente la vigente Orden SAS/2287/2010, de 19 de agosto, por la que se regulan los requisitos y el procedimiento para la acreditación de los centros, servicios y entidades privadas, concertadas o no, que actúen en el ámbito de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en las ciudades de Ceuta y de Melilla.

Del articulado de la norma se extrae la existencia de diversos tratamientos de datos de carácter personal que se producirán, de una parte, a

consecuencia de las previsiones de su articulado, y, de otra parte, como resultado de la recogida de dichos datos a través de los anexos de la Orden.

Así, en primer lugar, el artículo 1.4 *—in fine—* del proyecto que se analiza, establece una primera obligación con repercusión en el ámbito del derecho a la protección de los datos personales de las personas afectadas, al señalar que *“Los centros, servicios y entidades privadas se comprometerán a remitir al IMSERSO la información que se detalla en el artículo 6.2 (de la propia Orden)”*. Dicha obligación se incardina en el marco regulatorio general del citado apartado 4 del artículo 1, en el que se señala la necesidad de que los centros, servicios y entidades que deseen atender a personas en situación de dependencia, obtengan previamente la acreditación administrativa correspondiente.

Por su parte, el artículo 6.2 de la Orden concreta los requisitos necesarios para que la acreditación otorgada mantenga su vigencia, supeditándola al cumplimiento de una serie de obligaciones con incidencia en materia de protección de datos. A saber:

- a) Remitir anualmente a la Dirección Territorial del IMSERSO acreditante, la memoria de actividades del centro o servicio acreditado, incluyendo información referida a todos los condicionantes y requisitos de funcionamiento exigidos para la acreditación.
- b) Informar de forma inmediata de las altas y bajas de las personas usuarias en la prestación de los servicios concertados, o, en su caso, las correspondientes a perceptores de la prestación económica vinculada al servicio, remitiendo mensualmente un informe resumen de dichas altas y bajas y de la disponibilidad de plazas resultante.
- c) Comunicar en el plazo máximo de diez días hábiles desde que se produzcan las variaciones de las plantillas de personal en sus aspectos cuantitativos y cualitativos, que afecten a las ratios y/o a las titulaciones o a las cualificaciones profesionales exigidas o a las prestaciones que integran la cartera de servicios, así como, en su caso, a la obligación de reserva legal de empleo de trabajadores con discapacidad, establecidas en esta orden.

Pues bien, **en relación con la comunicación de dicha información** necesaria para el mantenimiento de la vigencia de la acreditación de los centros, servicios y entidades privadas autorizadas, conviene **reiterar aquí** lo expuesto en nuestro **Informe 133/2013**, al analizar el proyecto de Real Decreto por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, en el que se señaló que:

“La primera cuestión que cabe plantearse es si la comunicación de datos a la que se refiere este precepto exigirá la inclusión de los datos identificativos del beneficiario de

la prestación o servicio, dado que del tenor literal no se desprende necesariamente esta identificación del beneficiario. De este modo, siempre que fuera posible, y aplicando el principio de proporcionalidad, de forma que no fueran objeto de cesión datos que no resultasen necesarios a la finalidad regulada en el Proyecto, debería establecerse un sistema que evitase tal transmisión.

En caso de que sí se procediera a la comunicación de los datos identificativos de los interesados existiría una cesión de datos relacionados con la salud de los interesados, toda vez que de las prestaciones o servicios reconocidos y del grado de dependencia puede inferirse información relacionada con la salud presente, pasada o futura de los beneficiarios. En este caso la cesión debería encontrarse amparada, según exige el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 15/1999, por una norma con rango de Ley, pudiendo no obstante considerarse que dicha norma se encuentra recogida en los artículos 32 y 9 de la Ley 39/2006, anteriormente reproducidos.

No obstante, debe reiterarse que la inclusión de los datos identificativos, aun cuando pudiera ampararse en una Ley deberá tener lugar únicamente en cuanto resulte necesaria para el cumplimiento de su finalidad, cual es la determinación del nivel mínimo de protección a cargo del Estado al que se refiere la citada Ley 39/2006.”

En el presente caso, y siempre que sea posible, debe implementarse un sistema que minimice la transmisión de datos personales innecesarios en relación con la finalidad regulada en el proyecto. Esta exigencia es conforme con el principio de minimización de datos establecido en el artículo 5.1.c) RGPD, que dispone que los datos personales tratados sean adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario en relación con los fines para los que son procesados.

No obstante, la correcta gestión de los recursos públicos y la eficacia global del sistema, en consonancia con lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, requieren la comunicación de determinados datos identificativos. En particular, siguiendo en este punto lo previsto en el artículo 6.2 del proyecto de Orden, resulta imprescindible garantizar el acceso a la información relativa a:

- a) El mantenimiento de los condicionantes y requisitos necesarios para la vigencia de la acreditación.
- b) Las altas, bajas y plazas resultantes en el sistema.
- c) Las variaciones en las plantillas de personal, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, especialmente cuando afecten a ratios, titulaciones, cualificaciones profesionales o a las prestaciones incluidas en la cartera de servicios.

Dado que esta comunicación afecta a datos personales de especial protección de los beneficiarios de la prestación o servicio, su tratamiento se encuentra amparado por la letra h) del artículo 9.2 del RGPD. Esta disposición permite el tratamiento de datos personales, incluidos los de categorías especiales, para la prestación de asistencia o tratamiento de tipo sanitario o social, o gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social,

sobre la base del Derecho de la Unión o de los Estados miembros o en virtud de un contrato con un profesional sanitario (...).

Asimismo, el tratamiento de estos datos responde a los principios de eficacia y eficiencia administrativa, tal y como exige el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. La comunicación de esta información permite optimizar la gestión de los recursos disponibles y garantizar una adecuada planificación y prestación de los servicios públicos.

Por lo tanto, la transmisión de los datos identificativos en este contexto se ajusta plenamente a la normativa vigente, respetando los principios de exactitud y proporcionalidad, conforme al artículo 5.1.d) RGPD, que exige que los datos sean exactos y, cuando sea necesario, actualizados para evitar decisiones basadas en información incorrecta. En su virtud, deben adoptarse todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación los datos personales que sean inexactos con respecto a los fines para los que se tratan.

De otra parte, tanto el Sistema de Información para la Autonomía y Atención a la Dependencia, recogido en el artículo 37 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, como la propia Red de Comunicaciones derivada de dicho Sistema, regulada en el artículo 38 de la misma Ley, conforman —*también en este punto*— una habilitación legal suficiente, concretada en una norma con rango de ley formal (ex artículo 8 LOPDGDD) que sirve de base **para el intercambio** de la información personal generada por el sistema. A saber:

“Artículo 37. Sistema de información para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través del organismo competente, establecerá un sistema de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que garantice la disponibilidad de la información y la comunicación recíproca entre las Administraciones Públicas, así como la compatibilidad y articulación entre los distintos sistemas. Para ello, en el seno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se acordarán los objetivos y contenidos de la información.
(...)”

“Artículo 38. Red de comunicaciones.

1. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la utilización preferente de las infraestructuras comunes de comunicaciones y servicios telemáticos de las Administraciones Públicas, pondrá a disposición del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia una red de comunicaciones que facilite y dé garantías de protección al intercambio de información entre sus integrantes.

2. El uso y transmisión de la información en esta red estará sometido al cumplimiento de lo dispuesto en la *Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal*, y a los requerimientos de certificación electrónica, firma electrónica y cifrado, de acuerdo con la legislación vigente. (*Actualmente la remisión*

a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, debe entenderse referida al RGPD y a la LOPDGDD)

3. A través de dicha red de comunicaciones se intercambiará información sobre las infraestructuras del sistema, la situación, grado de dependencia y prestación reconocida a los beneficiarios, así como cualquier otra derivada de las necesidades de información en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.”

IV

El artículo 5 de la Orden regula **el procedimiento** de acreditación, que se inicia a solicitud de la persona titular o representante legal del centro, servicio o entidad, mediante la presentación del modelo que figura como Anexo XI. Dicha solicitud debe presentarse en el registro o en la sede electrónica correspondiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo acompañarse de los documentos señalados en el apartado 4 del citado artículo 5 de la Orden.

Así, entre otros documentos, deberán presentarse junto con la solicitud (i) una copia auténtica del documento nacional de identidad de la persona solicitante y, en su caso, del representante legal, (ii) el documento acreditativo de la representación legal, si procede, (iii) el organigrama y la plantilla de personal del centro o del servicio, especificando el nombre y los apellidos de los trabajadores, su número de afiliación a la Seguridad Social, su categoría profesional y, en su caso, su situación de discapacidad, y (iv) la documentación exigida para la acreditación del centro o servicio, tal como se establece en el apartado 2 del Anexo I de la Orden, así como la documentación específica aplicable a cada tipo de centro o servicio, según lo dispuesto en el apartado 5 de los Anexos II, III, IV y V.

Es importante destacar que la documentación enumerada constituye solo una parte del conjunto total de documentos requeridos en el procedimiento, que incluyen **datos personales** de personas físicas identificadas o identificables, **sobre los que se realizan tratamientos de datos personales**, lo que implica su **sujeción a la normativa de protección de datos**. En este sentido, la información contenida en estos documentos se ajusta a la definición de "dato personal" recogida en el artículo 4.1 RGPD, al tratarse de información relativa a personas físicas identificadas o identificables.

A su vez, en los artículos 7 y 8 del proyecto de Orden se regulan, respectivamente, el procedimiento de renovación y el de revocación de acreditaciones, poniéndose de manifiesto que en el curso de ambos tipos de tramitación se procederá, asimismo, al tratamiento de datos de carácter personal.

Finalmente, la Orden incorpora un total de doce Anexos que deben cumplimentarse con datos de carácter personal. Así, a través de los modelos e instancias que se plasman en dichos Anexos, se producirán diferentes tratamientos de datos, tanto de los beneficiarios de las prestaciones, como de los trabajadores y/profesionales de los diferentes centros, servicios y entidades privadas solicitantes.

Ya en nuestros Informe **271/2007** y **336/2013**, señalábamos:

“Como punto de partida, debe recordarse que el artículo 4 d) de la Ley 39/2006 reconoce el derecho de las personas en situación de dependencia “a que sea **respetada la confidencialidad en la recogida y el tratamiento de sus datos**, de acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.

Por otra parte, como ya se indicó, los artículos 37 y 38 de la Ley regulan el Sistema de Información objeto de desarrollo por el Proyecto sometido a informe, estableciéndose, como principio general en el artículo 38.2 que **“el uso y transmisión de la información en esta red estará sometido al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre**, de Protección de Datos de Carácter Personal, y a los requerimientos de certificación electrónica, firma electrónica y cifrado, de acuerdo con la legislación vigente”.

Según indica el artículo 37.1, la finalidad del sistema será la de garantizar “la disponibilidad de la información y la comunicación recíproca entre las Administraciones Públicas, así como la compatibilidad y articulación entre los distintos sistemas”.

La obligación de creación del sistema corresponde al Ministerio proponente, según el artículo 38.1, debiendo “a través de la utilización preferente de las infraestructuras comunes de comunicaciones y servicios telemáticos de las Administraciones Públicas” poner “a disposición del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia una red de comunicaciones que facilite y dé garantías de protección al intercambio de información entre sus integrantes”.

La comunicación de dicha información deberá fundarse en lo dispuesto en el artículo 38.3, según el cual “a través de dicha red de comunicaciones se intercambiará información sobre las infraestructuras del sistema, la situación, grado y nivel de dependencia de los beneficiarios de las prestaciones, así como cualquier otra derivada de las necesidades de información en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia”, debiendo ese intercambio fundarse en el ejercicio por los cesionarios de las competencias atribuidas por la propia Ley o ser necesario para el desarrollo por el cesionario de las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las ayudas y garantías derivadas de la aplicación de la Ley 39/2006.

Los datos incluidos en el sistema se derivarán, por último, de lo dispuesto en el artículo 37.2, según el cual “El sistema contendrá información sobre el Catálogo de servicios e incorporará, como datos esenciales, los relativos a población protegida, recursos humanos, infraestructuras de la red, resultados obtenidos y calidad en la prestación de los servicios”.

En consecuencia, la regulación del sistema y del fichero creado por la norma sometida a informe deberá respetar los criterios sentados en la Ley 39/2006, a fin

de dar cumplimiento al principio general de sometimiento a la Ley Orgánica 15/1999, consagrado por su artículo 38.2”.

En la actualidad, el sometimiento a la normativa de protección de datos contenida en la *Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre*, reconocido expresamente en el artículo 38.2 de la tan citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, debe entenderse en la actualidad referido al sometimiento y pleno respeto de la normativa vigente en materia de protección de datos, y, más en concreto, de lo dispuesto en el RGPD y en la LOPDGDD.

En consecuencia, habida cuenta de la realización de múltiples tratamientos de datos personales por parte de los órganos competentes para la tramitación del procedimiento de que se trata, se sugiere la incorporación de un nuevo artículo al proyecto de Orden, o bien de una disposición adicional, en la que se haga constar la existencia de los tratamientos de datos a los que se refieren los párrafos anteriores, introduciendo un texto que podría ser del siguiente tenor:

“Todos los tratamientos de datos de carácter personal derivados de la aplicación de esta Orden Ministerial, se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, garantizando el derecho fundamental de los afectados a la protección de sus datos de carácter personal”.

V

En el **artículo 4** de la norma que se informa se establecen los requisitos de calidad exigibles a los centros y servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a personas en situación de dependencia. Dichos requisitos se desarrollan en los **Anexos I al VI** del proyecto de Orden, y son los referidos a:

- Anexo I. Requisitos de calidad comunes a todos los centros y servicios: Recoge los requisitos que han de cumplir todos los centros y servicios en materia de accesibilidad, documentación e información, recursos humanos y calidad en el empleo, garantía de acceso a los centros y servicios sin discriminación y atención libre de sujeciones.
- Anexo II. Requisitos de calidad específicos de los centros residenciales: Establece la cartera de servicios y los requisitos

específicos relativos a la ubicación, instalaciones, equipamiento, personal y al aseguramiento de la dignidad de trato y del ejercicio de los derechos de las personas que reciben apoyos en los centros residenciales. Asimismo, determina los requisitos documentales específicos exigibles a este tipo de centros.

- Anexo III. Requisitos de calidad específicos de los centros de día y de noche. Establece la cartera de servicios y los requisitos específicos relativos a la ubicación, instalaciones, equipamiento, personal y al aseguramiento de la dignidad de trato y del ejercicio de los derechos de las personas que reciben apoyos en los centros de día y de noche. Asimismo, determina los requisitos documentales específicos exigibles a este tipo de centros.
- Anexo IV. Requisitos de calidad específicos del servicio de ayuda a domicilio. Establece la cartera de servicios y los requisitos específicos relativos al lugar de prestación del servicio, al personal y al aseguramiento de la dignidad de trato y del ejercicio de los derechos de las personas que reciben el servicio. Asimismo, determina los requisitos documentales específicos exigibles a este servicio.
- Anexo V. Requisitos de calidad específicos del servicio de teleasistencia. Establece la cartera de servicios y los requisitos específicos relativos a la ubicación, instalaciones, equipamiento, personal y al aseguramiento de la dignidad de trato y del ejercicio de los derechos de las personas que reciben el servicio. Asimismo, determina los requisitos documentales específicos exigibles a este servicio.
- Anexo VI. Requisitos de calidad específicos del servicio de asistencia personal. Establece la cartera de servicios, las modalidades de prestación del servicio y los requisitos específicos de cualificación profesional aplicables, en tanto se aprueba por el Instituto Nacional de las Cualificaciones la cualificación profesional de asistente personal.

Además, la Orden incorpora otros seis Anexos, **del VII al XII**, en los que se contienen los modelos e instancias que deben cumplimentarse por los interesados en orden a la acreditación de los requisitos establecidos tanto en el articulado de la norma, como en los Anexos I al VI.

- Anexo VII. Modelo de certificación de la habilitación excepcional para el ejercicio profesional en la categoría que corresponda.
- Anexo VIII. Modelo de certificación de la habilitación provisional en la categoría que corresponda.

- Anexo IX. Solicitud para la habilitación de profesionales de centros y servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia (SAAD).
- Anexo X. Modelo de declaración responsable para solicitantes de habilitación provisional.
- Anexo XI. Solicitud de acreditación de centros, servicios o entidades privadas para la promoción de la autonomía personal y/o la atención a personas en situación de dependencia.
- Anexo XII. Modelo de declaración responsable de renovación de la acreditación.

Prima facie, procede examinar el contenido de los seis primeros anexos (I al VI), en los que se establecen las condiciones y requisitos aplicables a los distintos tipos de servicio sujetos a regulación, verificando su consonancia con la normativa sobre protección de datos. En este sentido, al cumplimentarse los modelos incluidos en los anexos VII al XII, deberá atenderse a las previsiones de los **anexos I al VI** y a su adecuación a los principios relativos al tratamiento regulados en el **artículo 5 del RGPD**, por lo que, en primer término, resulta imprescindible su estudio.

En aras del análisis de conformidad de los **Anexos I al VI** con la normativa de protección de datos, deben considerarse tres circunstancias atinentes al **bloque normativo vigente** en el ámbito de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia, cuales son:

- La existencia de determinadas previsiones normativas incorporadas a normas con rango de ley formal, y, específicamente, a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre —cuya promulgación y vigencia efectiva es previa a la entrada en vigor del RGPD—, disponiéndose en sus artículos 14, 34.2 y 37.1, un conjunto de preceptos habilitantes para el tratamiento de los datos personales objeto de los diferentes anexos de la Orden.
- El contenido del Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), incorporado a la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE de 11 de agosto de 2022), a cuyas previsiones se ajustan los anexos de la Orden que ahora se informa, referida específicamente a las Ciudades de Ceuta y Melilla.

- La existencia de una regulación actualmente vigente sobre la materia que se analiza, contenida en la Orden SAS/2287/2010, de 19 de agosto, por la que se regulan los requisitos y el procedimiento para la acreditación de los centros, servicios y entidades privadas, concertadas o no, que actúen en el ámbito de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en las ciudades de Ceuta y de Melilla.

De acuerdo con el **Anexo I** de la Orden —Requisitos de calidad comunes a todos los centros y servicios—, entre otros, los datos personales que se tratarán en los centros y servicios de atención a personas en situación de dependencia incluyen:

- Datos identificativos: nombre y apellidos, fecha de nacimiento, documento nacional de identidad.
- Datos de situación de dependencia: grado de dependencia reconocida.
- Datos administrativos y de gestión: fecha de inicio del servicio, fecha y motivo de la baja.
- Datos relativos a planes de atención: planes personales de atención y apoyo, participación de familiares y coordinación con profesionales.
- Datos de autorizaciones y licencias que procedan según la normativa vigente.
- Datos sobre incidencias y calidad del servicio: hojas de quejas, sugerencias y agradecimientos.
- Datos de seguridad y confidencialidad: compromiso de confidencialidad de los profesionales.
- Datos sobre tecnología utilizada: información sobre sistemas informáticos y dispositivos tecnológicos.
- Datos sobre malos tratos: protocolos de prevención, detección y denuncia.
- Datos contractuales: modelo de contrato entre la entidad prestadora del servicio y la persona usuaria. En todo caso se exigirá garantía de confidencialidad y protección de datos, de acuerdo con la LOPDGDD y demás normativa aplicable vigente en materia de seguridad y protección de datos.
- Datos sobre cualificación profesional, habilitación y competencias del personal de atención directa de primer nivel (Ad1N), de segundo nivel (Ad2N): certificados de profesionalidad, títulos académicos y profesionales, habilitaciones excepcionales y provisionales, informes de vida laboral, certificados de la Tesorería General de la Seguridad Social, certificados de empresa, copias de contratos laborales, documentos que describan las actividades desarrolladas por trabajadores autónomos, y certificados de entidades de voluntariado.
- Datos sobre prestación del consentimiento informado: acreditación de dicho consentimiento y de la accesibilidad a los sistemas de comunicación de los centros asistenciales.

El artículo 5 RGPD establece los principios del tratamiento de datos personales. De acuerdo con dicho precepto, los datos personales regulados en el **Anexo I** se adecúan al principio de “Licitud, lealtad y transparencia”, toda vez que el tratamiento de estos datos está justificado con base en el artículo 6.1 c) y e) RGPD, y en el artículo 9.2 h), al referirse a la gestión de servicios sanitarios y sociales.

Por otra parte, los datos se recopilan exclusivamente para la prestación de servicios de autonomía personal y atención a la dependencia, de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, no detectándose un uso desproporcionado o ajeno a esta finalidad, por lo que se cumple con las exigencias del principio de “Limitación de la finalidad”.

A su vez, los datos tratados son necesarios y proporcionales para la gestión del servicio, no observándose una recopilación excesiva de información personal en atención a la finalidad pretendida y a la eficacia en la gestión del servicio de que se trata. En consecuencia, se observa la necesaria adecuación al principio de “Minimización de datos”.

Además, en el Anexo se impone la obligación de que los datos se actualicen en el registro de personas usuarias y planes de atención, lo que garantiza su precisión, de la que deriva el cumplimiento del principio de “Exactitud”.

En cuanto al principio de “Limitación del plazo de conservación”, si bien el Anexo I no especifica plazos, estos deberán ser adecuados a la normativa de protección de datos y a la normativa sectorial aplicable, según se señala en los propios Anexos IX y XI de la Orden. Así, en estos últimos se incorporan, respectivamente, las solicitudes para la habilitación de profesionales de centros, y para la acreditación de centros, servicios o entidades privadas, señalándose expresamente, en el apartado “Finalidad” de dichos anexos que “Los datos personales proporcionados se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se han recabado y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos, así como para otros fines de archivo, documentación y estadística pública”.

Finalmente, en cuanto al compromiso de confidencialidad y la exigencia de cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, se garantiza suficientemente la seguridad y protección de los datos, dándose el debido cumplimiento al principio de “Integridad y Confidencialidad”.

En conclusión, el tratamiento de datos personales en los centros y servicios de atención a la dependencia referidos en el **Anexo I** del proyecto de Orden se adecúa al RGPD, cumpliendo con los principios de licitud,

limitación de la finalidad, minimización, exactitud y confidencialidad. No se observan tratamientos desproporcionados o injustificados, y los datos recabados son esenciales para la correcta prestación del servicio. En cuanto al establecimiento de plazos de conservación definidos para los distintos tipos de datos tratados, la previsión sobre “Finalidad” de los Anexos IX y XI de la Orden resulta plenamente conforme con el principio de “limitación del plazo de conservación”.

En el **Anexo II** de la Orden —Requisitos de calidad específicos de los centros residenciales—, los datos personales que se tratarán incluyen, entre otros:

- Datos de salud: historial clínico, información sobre dependencia y discapacidad, tratamientos médicos y farmacológicos, información psicológica y de rehabilitación, grado de dependencia y necesidades de apoyo.
- Datos socioeconómicos y familiares: situación económica para determinar acceso a servicios, información sobre familiares o tutores legales, datos de la persona de contacto en caso de emergencia, y situación de apoyo familiar. Información personal necesaria para la elaboración de un plan personal de atención y de apoyo al proyecto de vida del residente.
- Datos laborales y profesionales: datos del personal del centro (nombre, cargo, titulación, formación especializada, experiencia laboral), horarios y turnos de trabajo, ratio de personal de los diferentes niveles profesionales. Certificaciones y titulaciones del personal de atención directa de primer nivel (Ad1N), de segundo nivel (Ad2N), de atención indirecta (AI), y datos personales de los profesionales de referencia (personas responsables de la promoción del apoyo personalizado a los usuarios de los servicios).
- Datos de localización y equipamiento: ubicación de los residentes dentro del centro, habitación asignada y unidad de convivencia, y uso de servicios del centro. Asignación a unidades de convivencia estables, compartidas con otras personas residentes, que responda a un modelo de hogar (en función de los criterios establecidos en el Anexo).

En el presente supuesto, de acuerdo con la normativa de protección de datos, la recogida de datos está legitimada por la prestación de servicios sociosanitarios y el cumplimiento de normativas de dependencia, respondiendo a los principios de “Licitud, lealtad y transparencia” del artículo 5 RGPD.

Según se dispone en el proyecto de Orden, se requerirá el consentimiento informado de los residentes o sus tutores legales para la realización de determinados tratamientos específicos.

A su vez, del Anexo II se desprende que los datos se recogen únicamente para finalidades vinculadas a la atención sanitaria, social y residencial —principio de “limitación de la finalidad”—. En consecuencia, conviene señalar en este punto que, en su caso, cualquier uso adicional de estos datos deberá contar con una base legal específica o con el consentimiento explícito del afectado.

En el citado Anexo II se dispone que las personas residentes gozarán simultáneamente de espacios que preserven debidamente su intimidad y de espacios de convivencia. Estas áreas se configuran como unidades de convivencia estables, compartidas con otras personas residentes, en las que convivirá un grupo reducido, que en ningún caso podrá superar las 15 personas residentes, de forma que se pueda garantizar un funcionamiento tipo hogar. Las personas que viven en estas unidades tendrán características personales y necesidades de apoyo diferenciadas.

La regulación general de las “Unidades de convivencia” se contiene en el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), contenido en la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE de 11 de agosto de 2022).

En concreto, el apartado Quinto del Acuerdo, referido a “Definiciones”, dispone que:

“Quinto. *Definiciones.*

A los efectos del presente Acuerdo, se entiende por:

(...)

c) Unidad de convivencia.

Son espacios de convivencia reducidos que pretenden reproducir la estructura, el ambiente y el funcionamiento de un hogar. Son espacios, más íntimos, dentro de la propia residencia en los que cohabita un grupo reducido de personas, con diversas situaciones de dependencia, a quienes se les proporciona una atención personalizada con los apoyos que precisan y desean para el desarrollo de su vida cotidiana. Estos espacios se asemejan a un hogar tanto en su arquitectura, decoración y mobiliario, como en las rutinas y horarios que se adaptan a las preferencias y hábitos de las personas que conviven en ellos, favoreciendo su participación, autonomía, comodidad, estimulación, orientación y bienestar. Están compuestos por un espacio común, que incluye una zona para la preparación de comidas, comedor y sala de estar para uso de las personas que conforman la unidad de convivencia, sus familiares y personas allegadas, y por las habitaciones de las personas que viven en la unidad. Es aconsejable que dispongan también de acceso a un área exterior, tipo terraza o jardín. Estas unidades están delimitadas, identificadas y diferenciadas de

otras unidades de convivencia del mismo centro y definen la estructura espacial de los centros residenciales con dimensión y ambiente de hogar.

Se identificarán y diferenciarán con claridad los espacios de convivencia de las personas residentes de las zonas de paso u otras zonas comunes.

Junto con las personas que conviven, forman parte de la unidad de convivencia el personal de atención directa, que debe tener una permanencia estable dentro de la unidad.”

De acuerdo con dicha definición, para la eficaz gestión de los espacios de convivencia en orden a la finalidad pretendida —cual es reproducir la estructura, el ambiente y el funcionamiento de un hogar—, por parte de los centros acreditados deberá procederse al tratamiento conjunto de los datos de carácter personal de grupos de personas residentes (los componentes de cada unidad de convivencia).

Pues bien, también en nuestra opinión —tal y como se expone en la MAIN del proyecto de Orden—, el texto sometido a informe contiene una concreta determinación del número de personas convivientes en la unidad de convivencia, que no será superior a 15, lo que supone la imposición de una limitación cuantitativa concreta en relación con el tratamiento de los datos personales de los afectados.

En este punto, conviene recordar que, en cuanto al principio de “minimización de datos”, el responsable del tratamiento debe recabar únicamente los datos estrictamente necesarios para la prestación del servicio, evitando la recogida masiva o innecesaria de datos sensibles. A su vez, los datos deben mantenerse actualizados, especialmente en relación con el estado de salud y el grado de dependencia de los afectados, garantizándose la solvencia de los procedimientos internos en orden a la corrección de los datos inexactos —principio de “exactitud”—.

De otra parte, los datos personales deben conservarse solo durante el tiempo necesario para la prestación del servicio —principio de “limitación del plazo de conservación”—, por lo que deberá procederse a la eliminación de los datos que resulten innecesarios de acuerdo con la normativa aplicable en cada caso. También en relación con el cumplimiento de este principio, tal y como se señaló en el análisis del anexo anterior, el establecimiento de plazos de conservación definidos para los distintos tipos de datos tratados se contiene expresamente en el apartado sobre “Finalidad” de los Anexos IX y XI de la Orden, que resulta plenamente conforme con el principio de “limitación del plazo de conservación”.

En cuanto al principio de “Integridad y confidencialidad”, debe traerse a colación la obligación que compete al responsable del tratamiento en relación

con la adopción de las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos contra accesos no autorizados o usos indebidos, garantizando muy especialmente la privacidad en el acceso a los datos de salud de los afectados. En este sentido, los empleados de los centros acreditados deberán cumplir fielmente con protocolos de confidencialidad que se implanten por parte del responsable del tratamiento.

En conclusión, el tratamiento de los datos en los centros residenciales del **Anexo II de la Orden se ajusta** a los principios del **RGPD**. A su vez, habida cuenta del tipo de datos personales de que se trata, conviene recordar que resulta crucial asegurar el consentimiento informado y garantizar la protección de los datos de salud, especialmente por su carácter sensible. En este sentido, los responsables de los tratamientos deberán velar, en todo caso, por el debido cumplimiento de las previsiones contenidas en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.

Por su parte, según se desprende del **Anexo III** de la Orden, referido a los “Requisitos de calidad específicos de los Centros de Día y de Noche”, los datos personales que se tratarán incluyen, entre otros:

- Datos de salud: historial médico, historial social, tratamientos en curso, información sobre discapacidad y dependencia, administración de fármacos, necesidades de atención sanitaria, psicológica y social, y datos sobre rehabilitación y terapia ocupacional.
- Datos socioeconómicos y familiares: información sobre familiares o tutores legales, datos de contacto en caso de emergencia, e información sobre el apoyo familiar recibido (relaciones con el ámbito familiar).
- Datos laborales y del personal: identificación y datos del personal (personal de atención directa de primer y segundo nivel, personal de atención indirecta, directoras y directores), titulación, experiencia laboral, horarios, turnos y ratios de personal por usuario, y formación y especialización del personal.
- Datos de localización y uso de servicios: ubicación de las personas usuarias dentro del centro, servicios utilizados, uso de equipamientos y recursos del centro, y datos de transporte y accesibilidad.

El análisis de conformidad del **Anexo III** con el Artículo 5 RGPD arroja conclusiones similares a las expuestas anteriormente —en el análisis de los Anexos I y II— en relación con el cumplimiento de la normativa de protección de datos. En este sentido, en el tratamiento de los datos personales en los Centros de Día y de Noche debe garantizarse el cumplimiento del RGPD mediante la correcta implementación de las medidas de seguridad

adecuadas. A su vez, dado que en el tratamiento se manejan datos sensibles de salud y dependencia, conviene recordar que, por parte del responsable del tratamiento, deben cumplirse las obligaciones sobre consentimiento informado de los usuarios y/o sus representantes legales.

En cuanto al **Anexo IV** de la Orden, referido a los “Requisitos de calidad específicos del Servicio de Ayuda a Domicilio”, los datos personales que se tratarán incluyen, entre otros:

- Datos personales identificativos: nombre completo de la persona usuaria del servicio, dirección del domicilio donde se presta el servicio, y datos de contacto.
- Datos de salud: grado de dependencia reconocido (I, II o III), necesidades de cuidado personal (entre otros, aseo, alimentación y movilidad), información sobre medicamentos prescritos y administración de los mismos, datos relacionados con la afectación cognitiva de la persona usuaria (si corresponde), información sobre incontinencia, movilidad y otros aspectos relacionados con la salud y el bienestar físico de la persona usuaria, y plan personal de atención y de apoyos, que incluye las necesidades y preferencias de la persona para su atención.
- Datos sobre la convivencia y entorno: información sobre las personas con las que convive el usuario (familiares y/o cuidadores), datos relacionados con el entorno doméstico y el nivel de accesibilidad de la vivienda.
- Datos relacionados con las prestaciones y servicios: información sobre los servicios que recibe la persona usuaria (tareas de higiene, alimentación, cuidado personal, etc.), y datos de las tareas realizadas por los auxiliares de ayuda a domicilio y los coordinadores.
- Datos relativos a la organización del servicio: datos del personal que presta el servicio (personal de atención directa de primer nivel y de segundo nivel, nombre, función, horarios, desplazamientos), e información de la coordinación y organización interna del personal.

También en relación con la “Ayuda a domicilio”, los datos personales deben recogerse únicamente para los fines específicos derivados de la prestación del servicio, que incluyen la atención personal, doméstica, psicosocial, y la gestión del entorno de la persona usuaria. Así, conviene recordar que el responsable del tratamiento debe tratar únicamente los datos personales necesarios para cumplir con los fines establecidos, limitándose a la información sobre la persona usuaria, sus necesidades y el servicio prestado.

Los datos personales deberán conservarse durante el tiempo necesario para la prestación del servicio y para cumplir con las obligaciones legales

aplicables. En este sentido, también aquí debe señalarse que en los Anexos IX y XI de la Orden se ha dispuesto la necesaria garantía de este principio, estableciéndose la previsión sobre “Finalidad” anteriormente transcrita.

Finalmente, conviene recordar que, en todos estos supuestos, la entidad prestadora del servicio de ayuda a domicilio deberá adoptar las medidas necesarias para cumplir con los principios del RGPD —principio de “proactividad”—, asegurando la implementación de políticas y procedimientos adecuados para el tratamiento de los datos personales.

En resumen, a la vista del análisis realizado, se extrae que la documentación y los procesos asociados al servicio de ayuda a domicilio del **Anexo IV de la Orden** se rigen por los principios de protección de datos, garantizándose el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos.

En los **Anexos V y VI** de la Orden, referidos respectivamente a los Requisitos de calidad específicos del Servicio de Teleasistencia, y a los Requisitos de calidad específicos del servicio de asistencia personal, los datos personales que se tratarán incluyen, entre otros:

- Datos de identificación: nombre y apellidos de la persona usuaria, dirección del domicilio, datos de contacto y datos identificativos de la persona cuidadora o representante legal, en su caso.
- Datos de características personales: edad y fecha de nacimiento, sexo y estado civil.
- Datos de información administrativa y asistencial: plan personalizado de teleasistencia, registro de intervenciones realizadas, registro de llamadas y comunicaciones con el servicio, y agenda personalizada.
- Datos de salud: estado de salud general de la persona usuaria, medicación habitual y tratamientos, discapacidad o situación de dependencia, y necesidades de apoyo e historial de emergencias atendidas.
- Datos de geolocalización: ubicación en tiempo real fuera del domicilio cuando se utilicen dispositivos de geolocalización.
- Datos de interacción con el sistema: registro de actividad en los dispositivos del servicio, uso de sensores y actuadores dentro del domicilio, y dispensadores de medicación.
- Datos sobre la prestación del servicio de asistencia personal: información sobre el asistente personal, incluyendo edad, residencia legal y antecedentes penales, evaluaciones de idoneidad y cualificación profesional del asistente personal, relación contractual con la persona usuaria o su representante legal, y registro de actividades y apoyos prestados conforme al plan de vida independiente.

También en este caso, conviene señalar que el tratamiento de datos personales en el Servicio de Teleasistencia y en el de Asistencia Personal, debe cumplir con los principios establecidos en el artículo 5 del RGPD. Así, la licitud, lealtad y transparencia se fundamenta en una base jurídica válida (consentimiento del usuario o cumplimiento de una obligación legal) y garantiza que la información proporcionada sea clara y comprensible. A su vez, siguiendo lo previsto por el principio de “limitación de la finalidad”, los datos deben ser utilizados únicamente para la prestación del servicio de teleasistencia o asistencia personal, y no para fines incompatibles con éste, debiendo recopilarse los datos estrictamente necesarios para la prestación del servicio, y evitando el almacenamiento de información innecesaria.

A su vez —principio de “exactitud”—, la información debe mantenerse actualizada y corregirse en caso de inexactitud, debiendo “limitarse el plazo de conservación” de los datos personales, que solo se almacenarán durante el tiempo necesario para los fines previstos (dichas exigencias, al igual que para los anexos anteriores, se plasman en el apartado sobre “Finalidad” de los Anexos IX y XI). Asimismo, en aras del principio de “integridad y confidencialidad”, el responsable del tratamiento debe prestar una especial atención en la aplicación de las medidas de seguridad adecuadas para evitar los accesos no autorizados, y la alteración o destrucción de la información personal.

Finalmente, en cuanto al principio de “responsabilidad proactiva”, siguiendo también en este punto lo previsto en el RGPD, la entidad prestadora del servicio *debe poder demostrar* el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos, estableciendo mecanismos de control y revisión.

La estructura de datos de los **Anexos V y VI se ajusta** a los principios del artículo 5 RGPD. No obstante, se recomienda que por parte de los responsables de los tratamientos se atienda muy especialmente a la implantación de las necesarias medidas de control de acceso a la información, especialmente en lo referente a la interoperabilidad de los sistemas, la geolocalización de los usuarios y la idoneidad del personal asistente.

VI

Según se viene analizando, en los Anexos de la Orden que se informa, se prevé la recogida y tratamiento de un amplio conjunto de datos de carácter personal, muchos de ellos referidos a categorías especiales de datos, como, entre otros, los **datos de salud, de dependencia y discapacidad**.

Pues bien, en estos casos, que implican el tratamiento de categorías especiales de datos personales, el Tribunal Constitucional en su sentencia 76/2019 —FJ 6 y 8—, destaca **la imperiosa necesidad de recoger en la ley**

habilitante las correspondientes garantías:

“c) La necesidad de disponer de garantías adecuadas es especialmente importante cuando el tratamiento afecta a categorías especiales de datos, también llamados datos sensibles, pues el uso de estos últimos es susceptible de comprometer más directamente la dignidad, la libertad y el libre desarrollo de la personalidad.”

La exigencia de especial protección de esta categoría de datos está prevista en el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981 (instrumento de ratificación publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 274, de 15 de noviembre de 1985), cuyo artículo 6 establece lo siguiente: «Los datos de carácter personal que revelen el origen racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas u otras convicciones, así como los datos de carácter personal relativos a la salud o a la vida sexual, no podrán tratarse automáticamente a menos que el derecho interno prevea garantías apropiadas. [...]» Esa exigencia ha sido igualmente afirmada por la Agencia Española de Protección de Datos. De acuerdo con el preámbulo de su Circular 1/2019, esas garantías adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales de los afectados «adquieren una especial relevancia tanto por la importancia de los datos personales objeto de tratamiento como por tratarse de tratamientos a gran escala de categorías especiales que entrañarán un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas difícilmente mitigable si no se toman medidas adecuadas». Asimismo, como ya se indicó en el fundamento jurídico 4 de esta sentencia, el Reglamento (UE) 2016/679 reitera la exigencia de que el legislador que regule el tratamiento de datos personales relativos a las opiniones políticas establezca dichas garantías adecuadas [artículo 9.2.g) y considerando 56].

Las garantías adecuadas deben velar por que el tratamiento de datos se realice en condiciones que aseguren la transparencia, la supervisión y la tutela judicial efectiva, y deben procurar que los datos no se recojan de forma desproporcionada y no se utilicen para fines distintos de los que justificaron su obtención. La naturaleza y el alcance de las garantías que resulten constitucionalmente exigibles en cada caso dependerán de tres factores esencialmente: el tipo de tratamiento de datos que se pretende llevar a cabo; la naturaleza de los datos; y la probabilidad y la gravedad de los riesgos de abuso y de utilización ilícita que, a su vez, están vinculadas al tipo de tratamiento y a la categoría de datos de que se trate. Así, no plantean los mismos problemas una recogida de datos con fines estadísticos que una recogida de datos con un fin concreto. Tampoco supone el mismo grado de injerencia la recopilación y el procesamiento de datos anónimos que la recopilación y el procesamiento de datos personales que se toman individualmente y no se anonimizan, como no es lo mismo el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona física, que el tratamiento de otro tipo de datos.

El nivel y la naturaleza de las garantías adecuadas no se pueden determinar de una vez para todas, pues, por un lado, deben revisarse y actualizarse cuando sea necesario y, por otro lado, el principio de proporcionalidad obliga a verificar si, con el desarrollo de la tecnología, aparecen posibilidades de tratamiento que resultan menos intrusivas o potencialmente menos peligrosas para los derechos fundamentales. (FJ.6)
[...]

(iv) Por último, debemos recordar que el Reglamento general de protección de datos establece las garantías mínimas, comunes o generales para el tratamiento de datos personales que no son especiales. En cambio, no establece por sí mismo el

régimen jurídico aplicable a los tratamientos de datos personales especiales, ni en el ámbito de los Estados miembros ni para el Derecho de la Unión. Por ende, tampoco fija las garantías que deben observar los diversos tratamientos posibles de datos sensibles, adecuadas a los riesgos de diversa probabilidad y gravedad que existan en cada caso; tratamientos y categorías especiales de datos que son, o pueden ser, muy diversos entre sí. El reglamento se limita a contemplar la posibilidad de que el legislador de la Unión Europea o el de los Estados miembros, cada uno en su ámbito de competencias, prevean y regulen tales tratamientos, y a indicar las pautas que deben observar en su regulación. Una de esas pautas es que el Derecho del Estado miembro establezca «medidas adecuadas y específicas para proteger los intereses y derechos fundamentales del interesado» [artículo 9.2.g) RGPD] y que «se ofrezcan garantías adecuadas» (considerando 56 RGPD). Es patente que ese establecimiento de medidas adecuadas y específicas solo puede ser expreso. Si la norma interna que regula el tratamiento de datos personales relativos a opiniones políticas no prevé esas garantías adecuadas, sino que, todo lo más, se remite implícitamente a las garantías generales contenidas en el Reglamento general de protección de datos, no puede considerarse que haya llevado a cabo la tarea normativa que aquel le exige. (FJ.8)”

Con el fin de dar adecuado cumplimiento a la normativa y jurisprudencia citada, esta Agencia viene recomendando repetidamente en sus informes que el *prelegislador*, en aquellos casos en que los tratamientos tienen **como base jurídica el art. 6.1.c) o e) del RGPD** (esto es, tratamientos cuya base es una obligación legal o una misión de interés público), y venga establecida por el Derecho de la Unión o en el Derecho del Estado miembro que se aplique al responsable del tratamiento y tal Derecho regule la operación específica de tratamiento o conjunto de operaciones en cuestión, como es el caso de las operaciones de tratamiento reguladas por el proyecto de Orden que se informa, o cuando el mismo implique el tratamiento de categorías especiales de datos personales, **haga uso de la posibilidad que establece el art. 35.10 RGPD, de modo que sea el propio órgano proponente de la disposición general, en el curso del procedimiento de creación de la norma (ley, real decreto, orden, etc.), quien realice una evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD) como parte de una evaluación de impacto general en el contexto de la adopción de dicha base jurídica.**

El art. 2.1, letra g), del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo es suficientemente expresivo de la voluntad del legislador de incluir en la MAIN, dentro del concepto “Otros impactos”, el análisis del “impacto que tendrá para la ciudadanía y para la Administración el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital que conlleve la norma”. A saber:

“g) Otros impactos: La memoria del análisis de impacto normativo incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente, prestando especial atención a los impactos de carácter social y medioambiental, al impacto en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y al impacto que tendrá para la ciudadanía y para la Administración el desarrollo o uso de los medios y servicios de la Administración digital que conlleve la norma.”

En este sentido, según se observa, en el apartado III **–ANÁLISIS DE IMPACTOS–** de la MAIN que acompaña al proyecto de Orden que se informa, se contiene una amplia referencia a siete (7) tipos de impacto; sin embargo, por parte del redactor de la norma, **no se ha realizado previsión alguna** en relación con el derecho fundamental a la protección de datos de los afectados.

Su previsión permitiría que los responsables o encargados del tratamiento no tuvieran la obligación de realizar dicha evaluación de impacto de datos personales (EIPD) prevista en el art. 35 RGPD (y que el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, ha considerado asimismo obligatoria), precisamente por haberse llevado ya a cabo en el seno del proceso de gestación de la norma de carácter general.

En consecuencia, *ab initio*, no habiéndose llevado a cabo por el órgano proponente de la disposición general una EIPD, sin que tampoco la MAIN contenga previsión alguna respecto al tratamiento de los datos de carácter personal, **cabría sugerir su realización** en los términos que han quedado expuestos, para garantizar y preservar la dignidad y derechos fundamentales de las personas afectadas, en consonancia con el mandato constitucional de respeto a la dignidad humana (artículo 10.1 CE.).

Sin embargo, el desarrollo reglamentario que se informa trae causa de una norma, la **Ley 39/2006, de 14 de diciembre**, cuya promulgación y vigencia efectiva es **previa a la entrada en vigor del RGPD**, disponiéndose en sus artículos 14, 34.2 y 37.1, un conjunto de preceptos habilitantes para el tratamiento de los datos personales objeto del presente proyecto.

A su vez, más recientemente, se aprobó el **Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad** de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), incorporado a la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (BOE de 11 de agosto de 2022), **a cuyo contenido se ajustan plenamente los anexos de la Orden que ahora se informa, referida específicamente a las Ciudades de Ceuta y Melilla.**

En consecuencia, en nuestra opinión, en el presente supuesto quedaría justificada la exención de la realización de la EIPD.

Según se expuso anteriormente, en los **Anexos VII al XII** de la Orden se contienen los modelos e instancias que deben cumplimentarse por los interesados en orden a la acreditación de los requisitos establecidos tanto en el articulado de la norma, como en los Anexos I al VI.

Estos anexos contienen diferentes solicitudes realizadas por los interesados y/o afectados por los tratamientos de los datos, incorporando una información básica (de primer nivel) y adicional (de segundo nivel) sobre protección de datos de carácter personal, así como una cláusula informativa completa que cumplen plenamente con las exigencias derivadas de la normativa de protección de datos.

Siguiendo las previsiones de los artículos 13 y 14 RGPD, dichos anexos incorporan tanto la posibilidad de ejercitar los derechos de los afectados, como una información más amplia y completa que incluye también los fines del tratamiento, la base jurídica del tratamiento, los destinatarios, etcétera.

En conclusión, tal y como se expuso en el Punto IV de este Informe, una vez **valorada positivamente la adecuación** general del proyecto de Orden a la normativa de protección de datos, al producirse tratamientos de datos de carácter personal, se sugiere la incorporación de un nuevo artículo —o bien de una disposición adicional—, al proyecto de orden, que podría ser del siguiente tenor:

“Todos los tratamientos de datos de carácter personal derivados de la aplicación de esta Orden Ministerial, se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, garantizando el derecho fundamental de los afectados a la protección de sus datos de carácter personal”.